

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En virtud del numeral 4 del artículo 114 de la ley 5 de 1992, propongo a los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes la **ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO** al Proyecto de ley N°. 197 de 2020 Cámara, ***“Por medio del cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”***, quedando así:

**Artículo Nuevo. Modifíquese el numeral 4 del artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:**

4. Definir la política pública y adelantar la inspección, vigilancia y el control del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, **así como los servicios ciudadanos digitales**, con excepción de aquellas funciones de inspección, vigilancia y control, expresamente asignadas en la presente Ley a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Agencia Nacional del Espectro.

## JUSTIFICACIÓN

La política de Gobierno Digital es definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se desarrolla a través de componentes y habilitadores transversales que, acompañados de lineamientos y estándares, permiten el logro de propósitos que generarán valor público en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC, de conformidad con el artículo 2.2.9.1.2.1 del Decreto 1078 de 2015 (DUR-TIC). Estos Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital son los elementos fundamentales de seguridad de la información, arquitectura y **servicios ciudadanos digitales**, que permiten el desarrollo de los componentes y el logro de los propósitos de dicha Política.

El artículo 2.2.17.2.1.1. del Decreto 1078 de 2015 distingue dos categorías de servicios ciudadanos digitales a saber, servicios base y servicios especiales. Su numeral 1 señala que son servicios ciudadanos digitales base aquellos que se consideran fundamentales para brindarle al Estado las capacidades en su transformación digital, los cuales son tres (3): Servicio de Interoperabilidad, Servicio de Autenticación Digital y Servicio de Carpeta Ciudadana Digital.

Por su parte, el mencionado artículo define los servicios ciudadanos digitales especiales como aquellos servicios que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

En ese orden, el conjunto de normas señaladas previamente establecen la posibilidad para que personas jurídicas de derecho privado presten servicios ciudadanos digitales especiales, siendo necesario que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejerza la función de vigilancia y control sobre la habilitación de que trata el artículo 9 de la Ley 2052 de 2020. Al

respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-851 de 2013 ha definido las funciones de inspección, vigilancia y control de la siguiente forma:

*“7.2.1. La función de inspección consiste en la facultad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control; 7.2.2. La vigilancia hace alusión al seguimiento y evaluación de las actividades de la entidad vigilada; 7.2.3. El control ‘en sentido estricto’ corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisión del controlado o la imposición de sanciones”.*

Por disposición del numeral 4 del artículo 17 de la ley 1341 de 2009, es un objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Definir la política pública y adelantar la inspección, vigilancia y el control del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, con excepción de aquellas funciones de inspección, vigilancia y control, expresamente asignadas en la presente Ley a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Agencia Nacional del Espectro.” A pesar de esto, la norma no precisa la vigilancia y control en relación con la prestación de servicios ciudadanos digitales.

Por disposición del artículo 2.2.17.3.3. del Decreto 1078 de 2015, la vigilancia y control de las actividades involucradas en la prestación de los servicios ciudadanos digitales se realizará por cada uno de los organismos del Estado que en el marco de sus competencias tengan que conocer de una o varias de las actividades involucradas en la prestación de tales servicios.

Por disposición del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política, que establece el principio de legalidad, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa (...)”. Este principio se compone por los principios de reserva legal y de tipicidad, en virtud de los cuales al legislador le asiste la potestad exclusiva para fijar las conductas que deban ser sancionadas disciplinariamente con la mayor precisión y claridad posible de forma que no se presente duda alguna sobre la acción, hecho u omisión reprochables, así como establecer los procedimientos administrativos que deben seguirse por las autoridades correspondientes para imponer los correctivos del caso, que también deben ser predeterminados cualitativa y cuantitativamente.

La inspección, vigilancia y control de los servicios ciudadanos digitales tendrá un impacto directo en la adecuada prestación de los mismos, asegurando la continuidad de los procesos de adaptación de enfoques innovadores, tanto en el producto como en el proceso, basados en el conocimiento, creación de capital humano y las necesidades de los participantes en el mercado.

El desarrollo económico basado en el conocimiento a partir de la innovación, se vincula de manera directa con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 de investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones previstos en el numeral 2 de esta Ley 1341. Igualmente, con el numeral 3 del artículo 17 de la misma ley, que señala como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.”

Por otra parte, la presente proposición se vincula de manera directa con la materia que se regula a través del Proyecto de Ley no. 197 de 2020 CÁMARA y que tiene como objeto promover la innovación en Colombia, consolidando ecosistemas de innovación en el territorio nacional.

Según señala su exposición de motivos, establecerá una Política Pública de Innovación que sea sólida, y cuyas medidas puedan ser implementadas en el mediano y largo plazo. Este proyecto de Ley, es un primer paso hacia buscar proponer soluciones dentro del sistema actual, para fomentar la innovación en Colombia y así, lograr resultados alentadores en materia de desarrollo económico y social.

Así mismo, señala que la innovación, acompañada de la ciencia y la tecnología, son aspectos fundamentales para lograr la transformación de la economía, productividad, competitividad y el desarrollo económico basado en el conocimiento y creación de mayor capital humano, en vez de un desarrollo económico basado en la producción de materias primas. La innovación es entonces una de las vías más efectivas, si no es la más, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aportar enormemente al crecimiento económico del país, contribuyendo al bienestar social de sus habitantes.

El desarrollo económico basado en el conocimiento a partir de la innovación, se vincula de manera directa con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 de investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones previstos en el numeral 2 de esta Ley 1341. Igualmente, con el numeral 3 del artículo 17 de la misma ley, que señala como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.” (Negrita fuera de texto)

Debido a la importancia de la innovación, esta hace parte de una de las bases transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Está identificado en el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como un eje para construir conocimiento. Frente a este capítulo, las bases del Plan disponen que “la sociedad y la economía del futuro estará fundamenta en el conocimiento. Colombia no sólo debe invertir más en CTI, sino mejorar la eficiencia del gasto, enfocarlo en solucionar problemas apremiantes del país, fortalecer los programas de investigación de alto nivel, formar investigadores con los pies en la realidad y formar las competencias necesarias para la nueva economía del conocimiento.”

El artículo 2 del proyecto de Ley no. 197 de 2020 CÁMARA, define la innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.

Como ya se dijo, los servicios ciudadanos digitales especiales son aquellos que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de


servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

Finalmente, por disposición del artículo 158 de la Constitución Política, “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. (...)”

Consideramos entonces que, la modificación al artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 a través del proyecto de Ley No. 197 de 2020 Cámara, respeta el principio de unidad de materia señalado, en tanto el régimen de vigilancia y control aplicado sobre la prestación de los servicios ciudadanos digitales, se manifiesta en el aseguramiento del fomento de la innovación en Colombia y así, lograr resultados alentadores en materia de desarrollo económico y social.

En virtud de lo expuesto, y en consideración a que no existe norma que precise las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en relación con la inspección, vigilancia y control de los servicios ciudadanos digitales, se hace necesaria la modificación propuesta a la Ley 1341 de 2009, y así contar con un régimen de vigilancia y control adecuado y articulado a esta ley, dando cumplimiento al principio de legalidad establecido en la Constitución Política.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, reading "Esteban Quintero Cardona", with a stylized flourish at the end.

**Esteban Quintero Cardona**  
**Representante a la Cámara por Antioquia**

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En virtud del numeral 4 del artículo 114 de la ley 5 de 1992, propongo a los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes la **ADICIÓN DE UN ARTICULO NUEVO** al Proyecto de ley N°. 197 de 2020 Cámara, ***“Por medio del cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”***, quedando así:

**Artículo Nuevo. Modifíquese el numeral 31 y agréguese el numeral 32 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, los cuales quedará así:**

**31. Ejercer la vigilancia y control de los prestadores de servicios ciudadanos digitales.**

**32.** Las demás que le sean asignadas en la Ley.

## JUSTIFICACIÓN

En el marco del proceso de transformación digital del Estado colombiano, el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, señala la obligación de las entidades estatales del orden nacional de incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este artículo indica que aquellos trámites y servicios que se deriven de los principios enunciados podrán ser ofrecidos tanto por **personas jurídicas privadas** como públicas incluyendo a la entidad que haga las veces de articulador de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para tal fin.

En consecuencia, el artículo 9 de la Ley 2052 de 2020 dispone que las **personas jurídicas privadas** podrán prestar servicios ciudadanos digitales especiales previa habilitación, y conforme con los lineamientos que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con los principios de integridad, autenticidad y no repudio contenidos en la Ley 527 de 1999.

La política de Gobierno Digital es definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se desarrolla a través de componentes y habilitadores transversales que, acompañados de lineamientos y estándares, permiten el logro de propósitos que generarán valor público en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC, de conformidad con el artículo 2.2.9.1.2.1 del Decreto 1078 de 2015 (DUR-TIC). Estos Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital son los elementos fundamentales de seguridad de la información, arquitectura y **servicios ciudadanos digitales**, que permiten el desarrollo de los componentes y el logro de los propósitos de dicha Política.

El artículo 2.2.17.2.1.1. del Decreto 1078 de 2015 distingue dos categorías de servicios ciudadanos digitales a saber, servicios base y servicios especiales. Su numeral 1 señala que son servicios ciudadanos digitales base aquellos que se consideran fundamentales para brindarle al Estado las

capacidades en su transformación digital, los cuales son tres (3): Servicio de Interoperabilidad, Servicio de Autenticación Digital y Servicio de Carpeta Ciudadana Digital.

Por su parte, el mencionado artículo define los servicios ciudadanos digitales especiales como aquellos servicios que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

En ese orden, el conjunto de normas señaladas previamente establecen la posibilidad para que personas jurídicas de derecho privado presten servicios ciudadanos digitales especiales, siendo necesario que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejerza la función de vigilancia y control sobre la habilitación de que trata el artículo 9 de la Ley 2052 de 2020. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-851 de 2013 ha definido las funciones de inspección, vigilancia y control de la siguiente forma:

*“7.2.1. La función de inspección consiste en la facultad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control; 7.2.2. La vigilancia hace alusión al seguimiento y evaluación de las actividades de la entidad vigilada; 7.2.3. El control ‘en sentido estricto’ corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisión del controlado o la imposición de sanciones”.*

Por disposición del numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es función del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conforme con la Ley.”

Por disposición del artículo 2.2.17.3.3. del Decreto 1078 de 2015, la vigilancia y control de las actividades involucradas en la prestación de los servicios ciudadanos digitales se realizará por cada uno de los organismos del Estado que en el marco de sus competencias tengan que conocer de una o varias de las actividades involucradas en la prestación de tales servicios.

Por disposición del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política, que establece el principio de legalidad, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa (...)”. Este principio se compone por los principios de reserva legal y de tipicidad, en virtud de los cuales al legislador le asiste la potestad exclusiva para fijar las conductas que deban ser sancionadas disciplinariamente con la mayor precisión y claridad posible de forma que no se presente duda alguna sobre la acción, hecho u omisión reprochables, así como establecer los procedimientos administrativos que deben seguirse por las autoridades correspondientes para imponer los correctivos del caso, que también deben ser predeterminados cualitativa y cuantitativamente.

La inspección, vigilancia y control de los servicios ciudadanos digitales tendrá un impacto directo en la adecuada prestación de los mismos, asegurando la continuidad de los procesos de adaptación de

enfoques innovadores, tanto en el producto como en el proceso, basados en el conocimiento, creación de capital humano y las necesidades de los participantes en el mercado.

El desarrollo económico basado en el conocimiento a partir de la innovación, se vincula de manera directa con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 de investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones previstos en el numeral 2 de esta Ley 1341. Igualmente, con el numeral 3 del artículo 17 de la misma ley, que señala como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.”

Por otra parte, la presente proposición se vincula de manera directa con la materia que se regula a través del Proyecto de Ley no. 197 de 2020 CÁMARA y que tiene como objeto promover la innovación en Colombia, consolidando ecosistemas de innovación en el territorio nacional.

Según señala su exposición de motivos, establecerá una Política Pública de Innovación que sea sólida, y cuyas medidas puedan ser implementadas en el mediano y largo plazo. Este proyecto de Ley, es un primer paso hacia buscar proponer soluciones dentro del sistema actual, para fomentar la innovación en Colombia y así, lograr resultados alentadores en materia de desarrollo económico y social.

Así mismo, señala que la innovación, acompañada de la ciencia y la tecnología, son aspectos fundamentales para lograr la transformación de la economía, productividad, competitividad y el desarrollo económico basado en el conocimiento y creación de mayor capital humano, en vez de un desarrollo económico basado en la producción de materias primas. La innovación es entonces una de las vías más efectivas, si no es la más, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aportar enormemente al crecimiento económico del país, contribuyendo al bienestar social de sus habitantes.

El desarrollo económico basado en el conocimiento a partir de la innovación, se vincula de manera directa con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 de investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones previstos en el numeral 2 de esta Ley 1341. Igualmente, con el numeral 3 del artículo 17 de la misma ley, que señala como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.” (Negrita fuera de texto)

Debido a la importancia de la innovación, esta hace parte de una de las bases transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Está identificado en el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como un eje para construir conocimiento. Frente a este capítulo, las bases del Plan disponen que “la sociedad y la economía del futuro estará fundamenta en el conocimiento. Colombia no sólo debe invertir más en CTI, sino mejorar la eficiencia del gasto, enfocarlo en solucionar problemas apremiantes del país, fortalecer los programas de investigación de alto nivel, formar

investigadores con los pies en la realidad y formar las competencias necesarias para la nueva economía del conocimiento.”

El artículo 2 del proyecto de Ley no. 197 de 2020 CÁMARA, define la innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.

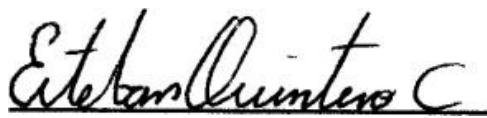
Como ya se dijo, los servicios ciudadanos digitales especiales son aquellos que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

Finalmente, por disposición del artículo 158 de la Constitución Política, “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. (...)”

Consideramos entonces que, la modificación al artículo 18 de la Ley 1341 de 2009 a través del proyecto de Ley No. 197 de 2020 Cámara, respeta el principio de unidad de materia señalado, en tanto el régimen de vigilancia y control aplicado sobre la prestación de los servicios ciudadanos digitales, se manifiesta en el aseguramiento del fomento de la innovación en Colombia y así, lograr resultados alentadores en materia de desarrollo económico y social.

En virtud de lo expuesto, y en consideración a que no existe norma que precise las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en relación con la inspección, vigilancia y control de los servicios ciudadanos digitales, se hace necesaria la modificación propuesta a la Ley 1341 de 2009, y así contar con un régimen de vigilancia y control adecuado y articulado a esta ley, dando cumplimiento al principio de legalidad establecido en la Constitución Política.

Atentamente



**Esteban Quintero Cardona**  
**Representante a la Cámara por Antioquia**



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En virtud del numeral 4 del artículo 114 de la ley 5 de 1992, propongo a los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes la **ADICIÓN DE UN ARTICULO NUEVO** al Proyecto de ley N°. 197 de 2020 Cámara, *“Por medio del cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”*, quedando así:

**Artículo Nuevo. Adiciónese un numeral al artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:**

**14. Prestar servicios ciudadanos digitales sin contar con la respectiva habilitación, o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de esa habilitación.**

## JUSTIFICACIÓN

En el marco del proceso de transformación digital del Estado colombiano, el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, señala la obligación de las entidades estatales del orden nacional de incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este artículo indica que aquellos trámites y servicios que se deriven de los principios enunciados podrán ser ofrecidos tanto por **personas jurídicas privadas** como públicas incluyendo a la entidad que haga las veces de articulador de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para tal fin.

En consecuencia, el artículo 9 de la Ley 2052 de 2020 dispone que las **personas jurídicas privadas** podrán prestar servicios ciudadanos digitales especiales previa habilitación, y conforme con los lineamientos que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con los principios de integridad, autenticidad y no repudio contenidos en la Ley 527 de 1999.

La política de Gobierno Digital es definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se desarrolla a través de componentes y habilitadores transversales que, acompañados de lineamientos y estándares, permiten el logro de propósitos que generarán valor público en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC, de conformidad con el artículo 2.2.9.1.2.1 del Decreto 1078 de 2015 (DUR-TIC). Estos Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital son los elementos fundamentales de seguridad de la información, arquitectura y **servicios ciudadanos digitales**, que permiten el desarrollo de los componentes y el logro de los propósitos de dicha Política.

El artículo 2.2.17.2.1.1. del Decreto 1078 de 2015 distingue dos categorías de servicios ciudadanos digitales a saber, servicios base y servicios especiales. Su numeral 1 señala que son servicios ciudadanos digitales base aquellos que se consideran fundamentales para brindarle al Estado las

capacidades en su transformación digital, los cuales son tres (3): Servicio de Interoperabilidad, Servicio de Autenticación Digital y Servicio de Carpeta Ciudadana Digital.

Por su parte, el mencionado artículo define los servicios ciudadanos digitales especiales como aquellos servicios que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

En ese orden, el conjunto de normas señaladas previamente establecen la posibilidad para que personas jurídicas de derecho privado presten servicios ciudadanos digitales especiales, siendo necesario que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejerza la función de vigilancia y control sobre la habilitación de que trata el artículo 9 de la Ley 2052 de 2020. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-851 de 2013 ha definido las funciones de inspección, vigilancia y control de la siguiente forma:

*“7.2.1. La función de inspección consiste en la facultad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control; 7.2.2. La vigilancia hace alusión al seguimiento y evaluación de las actividades de la entidad vigilada; 7.2.3. El control ‘en sentido estricto’ corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisión del controlado o la imposición de sanciones”.*

Por disposición del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituye infracción específica, “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones, licencias, autorizaciones y permisos.”

Por disposición del artículo 2.2.17.3.3. del Decreto 1078 de 2015, la vigilancia y control de las actividades involucradas en la prestación de los servicios ciudadanos digitales se realizará por cada uno de los organismos del Estado que en el marco de sus competencias tengan que conocer de una o varias de las actividades involucradas en la prestación de tales servicios.

Por disposición del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política, que establece el principio de legalidad, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa (...)”. Este principio se compone por los principios de reserva legal y de tipicidad, en virtud de los cuales al legislador le asiste la potestad exclusiva para fijar las conductas que deban ser sancionadas disciplinariamente con la mayor precisión y claridad posible de forma que no se presente duda alguna sobre la acción, hecho u omisión reprochables, así como establecer los procedimientos administrativos que deben seguirse por las autoridades correspondientes para imponer los correctivos del caso, que también deben ser predeterminados cualitativa y cuantitativamente.

La inspección, vigilancia y control de los servicios ciudadanos digitales tendrá un impacto directo en la adecuada prestación de los mismos, asegurando la continuidad de los procesos de adaptación de

enfoques innovadores, tanto en el producto como en el proceso, basados en el conocimiento, creación de capital humano y las necesidades de los participantes en el mercado.

El desarrollo económico basado en el conocimiento a partir de la innovación, se vincula de manera directa con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 de investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones previstos en el numeral 2 de esta Ley 1341. Igualmente, con el numeral 3 del artículo 17 de la misma ley, que señala como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.”

Por otra parte, la presente proposición se vincula de manera directa con la materia que se regula a través del Proyecto de Ley no. 197 de 2020 CÁMARA y que tiene como objeto promover la innovación en Colombia, consolidando ecosistemas de innovación en el territorio nacional.

Según señala su exposición de motivos, establecerá una Política Pública de Innovación que sea sólida, y cuyas medidas puedan ser implementadas en el mediano y largo plazo. Este proyecto de Ley, es un primer paso hacia buscar proponer soluciones dentro del sistema actual, para fomentar la innovación en Colombia y así, lograr resultados alentadores en materia de desarrollo económico y social.

Así mismo, señala que la innovación, acompañada de la ciencia y la tecnología, son aspectos fundamentales para lograr la transformación de la economía, productividad, competitividad y el desarrollo económico basado en el conocimiento y creación de mayor capital humano, en vez de un desarrollo económico basado en la producción de materias primas. La innovación es entonces una de las vías más efectivas, si no es la más, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aportar enormemente al crecimiento económico del país, contribuyendo al bienestar social de sus habitantes.

El desarrollo económico basado en el conocimiento a partir de la innovación, se vincula de manera directa con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 de investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones previstos en el numeral 2 de esta Ley 1341. Igualmente, con el numeral 3 del artículo 17 de la misma ley, que señala como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.” (Negrita fuera de texto)

Debido a la importancia de la innovación, esta hace parte de una de las bases transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Está identificado en el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como un eje para construir conocimiento. Frente a este capítulo, las bases del Plan disponen que “la sociedad y la economía del futuro estará fundamenta en el conocimiento. Colombia no sólo debe invertir más en CTI, sino mejorar la eficiencia del gasto, enfocarlo en solucionar problemas apremiantes del país, fortalecer los programas de investigación de alto nivel, formar

investigadores con los pies en la realidad y formar las competencias necesarias para la nueva economía del conocimiento.”

El artículo 2 del proyecto de Ley no. 197 de 2020 CÁMARA, define la innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.

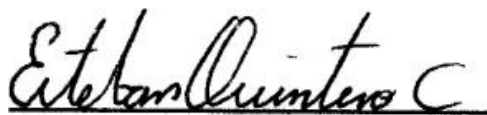
Como ya se dijo, los servicios ciudadanos digitales especiales son aquellos que brindan soluciones que por sus características realizan nuevas ofertas de valor y son adicionales a los servicios ciudadanos digitales base, o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los servicios ciudadanos digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

Finalmente, por disposición del artículo 158 de la Constitución Política, “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. (...)”

Consideramos entonces que, la modificación al artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 a través del proyecto de Ley No. 197 de 2020 Cámara, respeta el principio de unidad de materia señalado, en tanto el régimen de vigilancia y control aplicado sobre la prestación de los servicios ciudadanos digitales, se manifiesta en el aseguramiento del fomento de la innovación en Colombia y así, lograr resultados alentadores en materia de desarrollo económico y social.

En virtud de lo expuesto, y en consideración a que no existe norma que precise las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en relación con la inspección, vigilancia y control de los servicios ciudadanos digitales, se hace necesaria la modificación propuesta a la Ley 1341 de 2009, y así contar con un régimen de vigilancia y control adecuado y articulado a esta ley, dando cumplimiento al principio de legalidad establecido en la Constitución Política.

Atentamente



**Esteban Quintero Cardona**  
**Representante a la Cámara por Antioquia**